



CORRUPCIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

El enfoque político para una campaña organizada por la PSI y sus afiliadas

El público a menudo percibe la corrupción en los servicios públicos fundamentalmente como un fenómeno que consiste en la aceptación de sobornos por parte de empleados/as individuales de los servicios públicos a cambio de prestar servicios o hacer favores a ciudadanos/as individuales. Muchos/as ciudadanos/as de los países ricos y más desarrollados creen que la corrupción es especialmente un problema que afecta a los/las políticos/as en países pobres o en vías de desarrollo. Sin embargo, estos son solo algunos de los aspectos de la corrupción y centrarse exclusivamente en ellos oculta el problema fundamental de la corrupción como un reto para las sociedades de todo el mundo.

El fundamento, propósito y objetivo de la corrupción son el poder y el dinero. La corrupción está siempre relacionada con la desigualdad social y normalmente la multiplica y agrava. La corrupción es un ataque fundamental a la democracia; impide a los/las ciudadanos/as tener un acceso igualitario a los servicios y bienes públicos; y debilita la confianza en las instituciones públicas, los gobiernos y la propia democracia. La corrupción menoscaba en gran medida cualquier desarrollo económico decente, ya que desvía los beneficios obtenidos ilegalmente a bolsillos privados y proporciona ventajas económicas a aquellos que pagan sobornos o se benefician de la influencia política.

La falta de normas democráticas, control público y transparencia propician un caldo de cultivo perfecto para la corrupción; al mismo tiempo, los agentes económicos mundiales hacen uso de una corrupción generalizada en las democracias capitalistas. La corrupción tiene muchas facetas, incluida la de ejercer influencia política sin el pago directo de sobornos.

Las empresas privadas, los/las empresarios/as y los/las políticos/as esconden billones de dólares, a menudo obtenidos a través de corrupción, prácticas ilícitas y el fraude y la evasión fiscal en paraísos fiscales. Este dinero pertenece a los/las ciudadanos/as y lo necesitamos para financiar la protección social, la infraestructura o los servicios de calidad para el público.

La corrupción está relacionada de muchas maneras con los servicios públicos, bien porque se utilizan para intereses privados, políticos o empresariales o porque se privatizan o eliminan. Los/las trabajadores/as de los servicios públicos y sus sindicatos son los primeros interesados en prestar servicios de alta calidad a los/las ciudadanos/as sin ningún tipo de corrupción; servicios que al mismo tiempo estén concebidos de tal manera que los derechos legítimos de los/las trabajadores/as sean respetados y los/las empleados/as reciban un salario apropiado.

La manera de abordar la 'corrupción a menor escala' de trabajadores/as individuales de los servicios públicos consiste en dos partes. En primer lugar, los/las funcionarios/as necesitan salarios dignos

que les permitan mantener a sus familias y que sean equiparables a los de empleos en otros sectores que requieran competencias similares; esto debería eliminar una de las causas posibles, aun así injustificable, de la aceptación de sobornos. En segundo lugar, en muchos países los/las ciudadanos/as tienen malas experiencias con los gobiernos y las autoridades a la hora de cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. En estas circunstancias, los/las ciudadanos/as se ven obligados a encontrar sus propias soluciones. Sin una buena gobernanza ni servicios públicos de calidad transparentes e igualmente accesibles para todos, los sobornos y los 'buenos contactos' son a menudo la única manera de la que disponen los/las ciudadanos/as para obtener asistencia médica, permisos de construcción, decisiones judiciales o cualquier otro servicio. Por ello, los esfuerzos de la PSI por conseguir y defender los servicios públicos de calidad también son una contribución importante a la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la 'corrupción a menor escala' es, bajo nuestro punto de vista, la parte más pequeña del problema. Lo que se denomina 'corrupción a gran escala' tiene un impacto mucho mayor en el bienestar de las sociedades y sus economías. Las grandes empresas multinacionales están implicadas en fraudes a gran escala en todo el mundo. Pagan sobornos a políticos/as y hacen donaciones "legales" a partidos políticos con el objetivo de controlar o acceder a los recursos nacionales; privatizar o externalizar los servicios públicos; y obtener concesiones, condiciones favorables para las empresas o normas jurídicas ventajosas. Se deben imponer normativas estrictas y transparentes en el ámbito internacional y nacional con respecto a la adjudicación de contratos públicos, que a menudo es una fuente de corrupción.

La 'captura del Estado', como la han denominado los/las investigadores/as del Banco Mundial, incluye redes que las empresas establecen deliberadamente para influir a funcionarios/as del gobierno y políticos/as. Su objetivo es cambiar leyes y normativas a su favor y no es raro que se efectúen sobornos para ello. Periodistas independientes han revelado casos en países de la Unión Europea donde grandes empresas privadas han enviado a expertos/as pagados/as a los ministerios para redactar leyes nacionales que regulan su área de actividad. La elevada inversión de las empresas para ejercer presión sobre los/las políticos/as, a la que los/las ciudadanos/as de a pie y los sindicatos normalmente no tienen acceso, comporta un gran potencial de corrupción y sin embargo es una práctica legal en todas partes. Los mayores agentes y aprovechados son los que se benefician más de todas las formas de 'corrupción a gran escala'. La mayoría se encuentra en países democráticos ricos y emplea prácticas corruptas en sus países de origen y en países pobres o en vías de desarrollo.

La PSI y sus afiliadas desean colaborar con ONG y otras organizaciones de la sociedad civil para aumentar la conciencia acerca del problema de la 'corrupción a gran escala' y la 'captura del Estado'. Nuestra meta es el establecimiento de normas internacionales y leyes nacionales que permitan confiscar las ganancias y beneficios obtenidos a través de prácticas corruptas. Exigimos que se prohíba participar en procesos de licitación a las empresas multinacionales y sus filiales declaradas culpables de llevar a cabo actividades corruptas. Los tribunales nacionales, tanto en los países en los que operan las empresas como en sus países de origen, deben poder aplicar sanciones legales contundentes, como el encarcelamiento de directivos/as y políticos/as. Las sentencias deben hacerse públicas.

Numerosos datos demuestran que en la mayoría de los casos la privatización de los servicios públicos llevan a la deterioración y el encarecimiento de los servicios para los/las ciudadanos/as y a la pérdida de empleos y salarios más bajos para los/las empleados/as. La privatización también abre la puerta a la corrupción, ya que las empresas privadas tratan de hacerse con el control de estos servicios. La PSI y sus afiliadas continuarán su lucha para poner fin a la privatización y la financiación

insuficiente y la minimización de los servicios en manos públicas, lo que sirve como pretexto para presentar la privatización como algo necesario y sin alternativa.

La Unidad de Investigación de la PSI publicó un informe exhaustivo sobre la corrupción y los servicios públicos que arrojó luz sobre las diferentes formas de corrupción financiera y política en todas las partes del mundo. El análisis se basa en muchos ejemplos concretos y recomienda medidas para luchar contra la corrupción. Esta investigación es una herramienta importante para nuestra campaña y se utilizará para influir a organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, entre otras. Estas instituciones adoptan pocas medidas o medidas ineficaces para combatir la corrupción e incluso abren la puerta a la corrupción ejerciendo presión sobre los gobiernos para privatizar los servicios públicos o minimizar la financiación del sector público y reducir salarios y programas sociales, perjudicando así a los/las trabajadores/as y a los/las pobres.

Algunas de las medidas para combatir la corrupción pueden ser adoptadas por los sindicatos de los servicios públicos directamente. Sin embargo, también se necesitan medidas para eliminar políticas que apoyan la corrupción para las cuales nuestras afiliadas necesitan una colaboración más amplia con ONG y organizaciones de la sociedad civil. Esto incluye leyes sólidas que protejan a los denunciantes de irregularidades y periodistas independientes y establezcan una libertad de información, así como una justicia fiscal que frene la diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres y proporcione los recursos nacionales necesarios para financiar servicios públicos de calidad para todos.

Necesitamos organismos públicos de auditoría y control que sean totalmente independientes. Los/las funcionarios/as de estos organismos deben estar jurídicamente protegidos/as y los resultados de sus investigaciones deben ser publicados. La lucha a favor de un proceso democrático de toma de decisiones financieras, transparencia y rendición de cuentas es un valor en sí mismo y un instrumento importante para eliminar la corrupción.

La PSI desempeñará su papel en el ámbito internacional para impulsar las políticas descritas anteriormente, entre las cuales se encuentra la defensa de la justicia fiscal mundial y el cierre de paraísos fiscales dondequiera que se encuentren.

Jürgen Buxbaum

Coordinator Public Administration and Multinational Enterprises

Jurgen.buxbaum@world-psi.org

Public Services International

45, avenue Voltaire - 01210 Ferney-Voltaire - FRANCE

Tel: +33 4 50 40 11 51 / +33 4 50 40 64 64

Fax: +33 4 50 40 73 20

www.world-psi.org